

CRONICA DEL MES

NOVIEMBRE-DICIEMBRE

Ernesto Cruz Alfaro

En un esfuerzo por revertir el acelerado desgaste político que le representara el desenlace de las negociaciones para la liberación de Inés Duarte, las medidas intimidatorias con que el gobierno democristiano enfrentó a comienzos de noviembre las demandas reivindicativas de los trabajadores del sector público, sólo contribuyeron a ampliar la ola de paros y a profundizar el descontento laboral, añadiendo dificultades adicionales a la recepción del paquete de medidas monetarias y fiscales que se empezaba a anunciar para principios de enero de 1986.

Luego de que el penúltimo día de octubre el gobierno procediera a la militarización del ministerio de hacienda, mientras que la Policía de Hacienda capturaba al presidente y a un vocal de la Sociedad de Carteros y Empleados Postales (SU-CEPES), esta organización decretó un paro de labores exigiendo la libertad de los capturados y la destitución de tres funcionarios de la Dirección General de Correos a quienes acusaba de "incapacidad y conducta inmoral valiéndose de sus puestos." El mismo día, un segundo paro fue convocado por la Asociación Nacional de Trabajadores del Ministerio de Agricultura y Ganadería (ANTMAG), en apoyo a la lucha de AGEMHA y en demanda de respuesta favorable a un pliego de peticiones presentado desde junio a los titulares del ministerio de agricultura.

Paulatinamente, otras fuerzas sociales y políticas externaron su posición sobre el conflicto de AGEMHA. Entre ellas, la UPD recomendó al gobierno "deponer y desechar de una vez por todas las actitudes amenazantes y represivas como la manifestada por el ministerio de hacien-

da;" mientras tanto, aprovechando la ocasión para llevar agua a su molino político, ARENA y el PCN solicitaron a la asamblea la destitución de dicho funcionario, por "irresponsable, incapaz y represivo." El PCN también aprovechó el momento para proponer al gobierno un aumento salarial para todos los empleados públicos, estabilidad en sus cargos a los dirigentes gremiales y sindicales, la aprobación de la ley de protección al consumidor y la modificación a la ley de creación del INPEP a fin de que los trabajadores públicos pudieran jubilarse a los 35 años de servicio y 55 de edad.

El 7 de noviembre, AGEMHA convino en finalizar el paro, luego de que el presidente de la asamblea, se comprometiese ante la dirigencia de la asociación a aprobar un aumento salarial para todos los empleados públicos a partir del 1 de enero de 1986 y a gestionar ante el ejecutivo la devolución con observaciones a la asamblea del decreto 162, así como el pago de un aguinaldo mayor de 500 colones para los empleados públicos y a estudiar la petición de reformas a la ley de jubilaciones. Luego de informar sobre la solución del conflicto, el ministro de cultura advirtió que "éste ha sido el último esfuerzo del gobierno para llegar a un acuerdo con los que producen problemas y en el futuro será aplicada la ley con todo rigor."

Por otro lado, 9 mil trabajadores del ministerio de agricultura mantuvieron todavía el paro decretado a principios del mes, y la asociación de trabajadores de ANTEL (ASTTEL) se declaró en huelga en protesta por la detención de dos hijos de un directivo de la asociación, acusados de per-

tener a las FAL y de haber participado en el secuestro del coronel Avalos. Sucesivamente, concretando las advertencias de la Central de Trabajadores Salvadoreños (CTS) de que los 40 mil miembros de sus organizaciones se irían progresivamente a un paro general para exigir soluciones a su plataforma reivindicativa, 5 mil trabajadores del ministerio de obras públicas (MOP) se sumaron el 12 a la huelga; 1.500 del Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU) el 13; y 3.200 empleados municipales de San Salvador y otras 7 alcaldías, el 14. El conflicto de ANTEL se complicó el 18, cuando fuerzas de la Policía Nacional ocuparon las instalaciones centrales de dicha institución en San Salvador, tras la declaración de ilegalidad de la huelga.

En este marco de confrontación, el presidente Duarte anunció el 22, por cadena nacional de radio y televisión, la concesión de un aumento salarial de 100 colones mensuales a partir del 1 de enero todos los empleados públicos con sueldos menores a 1.500 colones, así como un aguinaldo general de 600 colones para todos los empleados del sector. A la par, anunció "medidas preventivas" para poner fin a la ola de paros, los cuales iban desde los descuentos y despidos hasta la militarización de los servicios públicos, dando de alta a los empleados y sometiéndolos a las "disposiciones disciplinarias de la Fuerza Armada." Pocos días después, los distintos paros se fueron resolviendo gradualmente. Así, el 25, en reunión sostenida con el gerente de ANTEL y el ministro de justicia, los sindicalistas obtuvieron la promesa de que no se tomaría ningún tipo de represalia contra quienes participaron en la huelga, se respetaría la integridad de ASTTEL y se proseguirían las negociaciones pendientes sobre incrementos salariales. El 27 se solucionaron los paros decretados en el ministerio de agricultura, el MOP y el ISTU, luego que el gobierno se comprometiera a conceder 21 de las 49 demandas presentadas, y a formar una comisión especial para investigar las denuncias presentadas contra varios jefes.

Enfrentado a esta coyuntura de considerable efervescencia laboral, Duarte realizó una nueva visita a Estados Unidos, como parte de una gira que lo llevó también por Francia y España. El presidente viajó acompañado de su esposa y de su hija Inés. En Washington, el presidente Reagan le comunicó haber firmado la aprobación de 22 millones de dólares en asistencia "antiterrorista" para los cuerpos de seguridad salvadoreños,

mientras que la AID ofreció 30 millones de dólares al Banco Central de Reserva (BCR) para cubrir las necesidades de divisas, y estudiar una solicitud de ayuda por otros 54 millones destinados a programas de reactivación económica. No todas las promesas de ayuda, sin embargo, fueron igualmente fluidas. Un comité del senado fijó como condición para entregar 10 millones en ayuda militar —parte de un paquete más amplio de 132 millones de dólares— la certificación de que los responsables de la muerte de los asesores sindicales norteamericanos y del presidente del ISTA, asesinados en el Hotel Sheraton en 1981, fueran procesados judicialmente.

En pago del apoyo político y los dólares recibidos, Duarte declaró que el secuestro de su hija era una evidencia más de la agresión nicaragüense hacia sus vecinos y agradeció al gobierno norteamericano la asesoría psicológica brindada para tratar a su hija del síndrome de Estocolmo, pues según el presidente, el FMLN intentó someterla a un "lavado de cerebro" para enfrentarla a él. Casi coincidiendo con la visita, el *Dallas Morning News* difundió una transcripción de la entrevista que el FMLN le hiciera a Inés Duarte el 24 de octubre en Tenancingo, poco antes de liberarla, y en la cual ésta manifestó que "a pesar de las dificultades, el trato fue muy humanitario y respetuoso" y atestiguó que entre el 17 y 18 de dicho mes hubo un bombardeo de la fuerza aérea cerca de donde se encontraban: "sentí cómo las bombas retumbaban, ver la avioneta que le dicen la 'carreta,' cómo tira las granadas; la sensación fue horrible. Ahora pienso en el miedo de la población civil cuando ve a esas avionetas volando." Al comentar la entrevista, el ministro de cultura explicó que "la obligaron a formular las declaraciones antes de liberarla. Cuando se le dice a una persona secuestrada que la liberarán, por supuesto que dirá cualquier cosa."

En la segunda escala de su gira, la familia Duarte realizó una visita privada a Francia, para agradecer al gobierno de este país las gestiones realizadas en favor de la liberación de Inés Guadalupe. Finalmente, el 5 de noviembre, Duarte y su familia fueron recibidos en Madrid por los reyes españoles y el presidente del gobierno Felipe González. Durante el almuerzo que los monarcas ofrecieron en su honor, Duarte reiteró "los principios de la democracia activa y del diálogo sincero" sobre "el odio y la confrontación." Por su parte, el rey expresó que la crisis social sufrida por El Salvador y los otros países

del istmo debía mover a la exploración de "nuevas formas de cooperación para evitar que la persistencia de los problemas estructurales imponga desproporcionadas servidumbres económicas y políticas."

Coincidiendo con el último día de estadia del mandatario en España, el 7 de noviembre, realizaron escala técnica en Madrid los dirigentes del FDR, Guillermo Ungo y Rubén Zamora, procedentes de una reunión de los países no alineados efectuada en Belgrado. Según informó un vocero del FDR, "Duarte tenía antes de venir a España la propuesta de un encuentro en Madrid con los dirigentes del frente." El mandatario, sin embargo, declaró no estar enterado de la "hipotética entrevista," aunque "quiero dejar claro que no tengo inconveniente en ésa u otra entrevista, distinguiendo los grupos que están radicalizados en una doctrina terrorista, que están armados y matan, y los que buscan un cambio político. Ungo y Zamora tienen derecho a exponer sus puntos de vista, porque nunca han matado a nadie y no han tomado las armas." No obstante, añadió que "los dirigentes del FDR ya no tienen representatividad, porque los comandantes guerrilleros se la han arrebatado." Por su parte, Ungo declaró que "todas las gestiones que se realizan desde hace once meses para hablar con Duarte o su gobierno son denegadas sistemáticamente. Duarte no puede, no quiere o no lo dejan continuar el diálogo interrumpido. El sabía que íbamos a venir a Madrid. No puede esperar unas horas para hablar de la paz en El Salvador, pero sí puede pasarse tres días de abrazos con Reagan."

Los abrazos con Reagan, sin embargo, no fueron suficientes para contener el vertiginoso desmoronamiento de la hegemonía democristiana sobre el poder formal del Estado y la estructura de partidos surgida en los comicios de marzo. En declaraciones ofrecidas el 30 de octubre, el mayor D'Aubuisson expresó la opinión prevaleciente en la oposición respecto del debilitamiento político que le representaron al mandatario los acuerdos del canje con el que culminó el secuestro de su hija. Según D'Aubuisson, el presidente Duarte demostró "incompetencia y falta de entereza, ya que al primer problema serio se desmoronó," dejando "en un ridículo espantoso a quienes lo pusieron, ya que el hombre grande que habían hecho resultó un hombre de barro o de azúcar, no era nada."

Aparentemente, la crisis de hegemonía del PDC habría sido tan notoria que incluso Acción Democrática (AD), a pesar de haber reafirmado el pacto interpartidario de cooperación política suscrito con el PDC en mayo de 1984, manifestó que "el proceso democrático se encuentra hoy en día en una situación sumamente crítica y delicada, con posibilidades muy acentuadas de derrumbarse estrepitosamente." Por su lado, con ocasión de su vigésimo quinto aniversario de fundación, el PDC dio a conocer, como surgida de la convención del partido, realizada el 23 de noviembre, una pobre plataforma política llamando a cerrar filas en favor de una "unidad nacional" de la cual dicho partido sería el "conductor." En otra formulación, el propio mandatario expresó ese mismo propósito en la inauguración del II Congreso Centroamericano de Administradores de Empresas, cuando manifestó que "hay objetivos que trascienden el gobierno, que trascienden los partidos, que trascienden a las instituciones, objetivos que son de nuestro país, que son los objetivos nacionales y en los cuales coincidimos ante el enemigo común." Tal línea de discurso encontró un eco muy favorable en la Fuerza Armada, a juzgar por las declaraciones del general Blandón de que ante las arremetidas del FMLN en los campos militar y político, en éste último mediante la "promoción de movimientos huelguísticos," lo único que podía "salvar al país en un corto plazo es una actitud positiva de la ciudadanía en general, bajo un patrón de absoluta colaboración y unidad con la Fuerza Armada," a efecto de lo cual el gobierno había diseñado conjuntamente con el alto mando el plan "Unidos para reconstruir."

En el terreno militar, el mes arrojó un ritmo de actividad inferior al de octubre, aunque en la línea de profundizar la guerra de desgaste librada en los meses anteriores. Como parte rutinaria de la estrategia de desgaste al FMLN, la Fuerza Armada mantuvo a lo largo del mes operativos permanentes en prácticamente todas las zonas conflictivas del país. Así, el 9, reanudó operaciones de regular envergadura en el norte y oriente de Chalatenango, el área de Guazapa-Suchitoto y el norte de San Vicente. Otras operaciones menores se efectuaron en el noroeste de Cabañas, los alrededores de Tenancingo, el sureste de San Vicente y en el norte de Morazán y La Unión. Paralelamente, con el propósito de garantizar las cosechas de café y algodón, la Fuerza Armada desarrolló operativos orientados específicamente a proteger las actividades de recolección, luego de

que el FMLN decretara una tabla salarial para la corta de café, algodón y caña, que superaba en casi el doble a la puesta en vigencia por el gobierno, y asegurara que haría efectivo su cumplimiento en todas las haciendas del país donde se cultivasen tales productos. En este contexto, el 5 inició un fuerte operativo en la franja central y en el área norte de Usulután y San Miguel, y mantuvo en Santa Ana y La Paz acciones permanentes de patrullaje y vigilancia de fincas de café.

Por su lado, pese al incremento de las operaciones aeromóviles, las cuales, según aseguró Blandón, permitían a la Fuerza Armada concurrir a cualquier lugar del país inmediatamente, el FMLN realizó diversas acciones ofensivas de relativa importancia: en la madrugada del 2, en una operación denominada "Junto a la clase trabajadora unidos venceremos," atacó la guarnición de Guarnecia (Santa Ana), a cuyos efectivos causó 6 puertos y 10 heridos; el 9 realizó un ataque de hostigamiento contra el cuartel de Santa Rosa de Lima (La Unión), en el cual la Fuerza Armada reconoció 5 bajas; y el 15 atacó las instalaciones de la primera brigada de infantería, en San Salvador, y la comandancia de Mejicanos.

Según un balance ofrecido por fuentes castrenses a finales de noviembre, en el transcurso del mes, la Fuerza Armada causó 73 muertos y 49 heridos al FMLN (una reducción del 51 por ciento respecto a las bajas guerrilleras de octubre) y capturó 308 rebeldes (23 por ciento más que en octubre). Asimismo, desmanteló 8 campamentos y 2 hospitales clandestinos durante operaciones realizadas en Morazán, Usulután, La Paz, Cabañas y el cerro de Guazapa. Las mismas fuentes admitieron 155 bajas (21 muertos y 134 heridos) y 2 desaparecidos en las filas castrenses (una reducción del 65 por ciento en bajas con relación a octubre). El 29 por ciento de las bajas de noviembre se produjo por campos minados. El ejército perdió 19 fusiles de grueso calibre, 3 lanzagranadas M-79 y una ametralladora M-60, mientras que le habría incautado 80 armas de diverso tipo al FMLN.

Por su parte, el FMLN aseguró haber causado 581 bajas a la Fuerza Armada (31 por ciento menos que en octubre). Según Radio Venceremos, 221 bajas se produjeron en la zona oriental, 119 en la paracentral, 194 en la central y 47 en Santa Ana. La emisora añadió que, durante el mes, el FMLN realizó 34 emboscadas contra camiones militares, destruyó 5 camiones de transporte y averió 3 helicópteros.

Tal nivel de actividad militar, si bien menor en términos comparativos con meses anteriores, bastó para alimentar las percepciones de cada uno de los bandos sobre su propia posición de fuerza y mantener empantanado el proceso de diálogo. Pese a ello, y al rechazo de Duarte a reunirse con los dirigentes del FDR en Madrid, la comandancia general del FMLN dio a conocer el 15 de noviembre un extenso documento donde replanteó la propuesta de solución política global al conflicto presentada en Ayagualo y reiteró que las causas que lo originaron no sólo persistían, sino que "se han hecho más evidentes y profundas" al tiempo que el curso de la guerra había llevado a una "objetiva e innegable situación de dualidad de poderes que tienen expresión política, poblacional, militar y territorial." En razón de ello, la comandancia reafirmaba que una paz negociada "debe comprender la formación de un gobierno transitorio de amplia participación que incluya al FDR-FMLN y el mantenimiento del poder armado del FMLN," mientras se resolvía la existencia de los dos ejércitos y se creaban las condiciones para que el pueblo decidiera "democrática y libremente el destino futuro del país por medio de unas elecciones verdaderamente libres." El gobierno salvadoreño calificó tal propuesta de "ilógica" ya que "significa entregarle el poder al FMLN," mientras que el departamento de Estado norteamericano la interpretó como un "ardid propagandístico" que no podía ser tomado "seriamente en cuenta" y resaltó que la ausencia del FDR en la firma del documento "indica que ese grupo y su jefatura son cada vez menos relevantes dentro de la alianza guerrillera y subraya que no participan en el proceso de toma de decisiones del FMLN." En contraste, acuerpando las presiones en favor del diálogo generadas por el primer aniversario del encuentro de La Palma, el mes presentó diversos eventos encaminados a defender la necesidad de reanudar urgentemente el proceso, entre los cuales destacaron el XVII Congreso Federal Ordinario de FENASTRAS "Por la libertad sindical, el diálogo y la negociación para alcanzar la paz;" la mesa redonda de la UCA sobre el papel de la Iglesia en el proceso de diálogo y el primer foro obrero-campesino "Por el diálogo y la paz en El Salvador."

En lo referente a la política exterior, el mes transcurrió sin ningún avance cualitativo en el difero limitrofe con Honduras, no obstante la inminencia del vencimiento del plazo fijado por el tratado de paz para dirimir directamente el liti-

gio. Lejos de acercarse a una solución de éste, vecinos del cantón Sabanas (Morazán) denunciaron que tropas hondureñas ocuparon el 2 de noviembre el lugar y les ordenaron largarse de allí por que "es territorio hondureño." Al lamentar el incidente, autoridades militares salvadoreñas se limitaron a explicar que posiblemente se trataba de un caso ajeno a la voluntad del gobierno y ejército de Honduras. Tres días después, el canciller hondureño, Edgardo Paz Barnica, reiteró una vez más que "El Salvador no tiene voluntad política para resolver el diferendo" y que "lo más probable es que se tenga que acudir a La Haya," ya que el presidente Duarte "está jugando con una cuestión tan seria como es la cuestión fronteriza."

A nivel regional, las perspectivas de distensión recibieron un leve impulso el 11 y 12 de noviembre, cuando se realizó en Luxemburgo la segunda cumbre de cancilleres de la Comunidad Económica Europea (CEE), España, Portugal, los países de Centroamérica y el grupo de Contadora, tendiente a institucionalizar la asistencia europea al desarrollo económico y la solución política de los conflictos del istmo centroamericano, según los objetivos de cooperación acordados en la reunión de San José en septiembre de 1984. Los 21 cancilleres presentes en Luxemburgo se comprometieron a impulsar las gestiones de Contadora "en favor de una solución pacífica, regional, global y negociada para poner término a la violencia y a la inestabilidad en la región" y recomendaron "una retirada de las fuerzas militares extranjeras, una congelación de la compra de armas y un compromiso de estimular la democracia por medio de elecciones libres."

En relación a esto último, noviembre satisfiso hasta cierto punto las sugerencias de la cumbre de cancilleres. En medio de su peor crisis económica en 50 años y de un amplio descontento social en los más diversos sectores del país, Guatemala celebró el 3 de noviembre elecciones generales para presidente, diputados y alcaldes. A juzgar por el testimonio de numerosos observadores internacionales, el evento se realizó con suficiente pureza técnica y un aceptable nivel de participación. El ganador de la primera ronda fue el candidato democristiano, Vinicio Cerezo, con el 38.6 por ciento de los votos y una holgada victoria sobre su más inmediato oponente, Jorge Carpio Nicolle, de la Unión del Centro Nacional (UCN), quien obtuvo el 20.28 por ciento, mientras que la ultraderecha sufrió su mayor des-

calabro electoral de las últimas tres décadas. Sin embargo, aunque importantes como posibilidad de un retorno a la constitucionalidad, las elecciones guatemaltecas fueron vistas con cautela por los sectores más progresistas del país, e incluso por el propio Cerezo, quien admitió que el proceso de democratización "provocará definitivamente algunos roces con el ejército" y advirtió que no se le podía pedir que procesara judicialmente a los militares involucrados en violaciones a los derechos humanos, "si empiezo a procesar a los generales según el modelo argentino, soy hombre muerto."

Tres semanas después, en un ambiente caracterizado por la rivalidad de personalidades en el seno de los partidos Liberal y Nacional, Honduras celebró elecciones para presidente, 3 sustitutos, 132 diputados y 284 alcaldes. Según un acuerdo previo convenido entre las diversas fuerzas políticas, el procedimiento para la elección del presidente consistiría en un sistema especial, conocido como "canasta uruguaya," en virtud del cual se permitió la inscripción de varios candidatos de un mismo partido (el Liberal inscribió 4 y el nacional 3), tras estipularse que el vencedor sería el candidato que obtuviese más votos de entre sus rivales correligionarios y que al mismo tiempo perteneciera al partido ganador. Dadas las reglas de la canasta uruguaya, violatorias de la constitución hondureña (la cual establece que el presidente de la república debe ser electo por mayoría simple), el candidato nacionalista, Rafael Callejas, quien obtuvo el 42 por ciento del total de votos válidos, resultó perdedor frente a José Azcona, del partido Liberal, quien sólo obtuvo el 27 por ciento de los votos.

Mientras tanto, entre uno y otro evento electoral, el grupo técnico de vicescancilleres del grupo de Contadora y de los países centroamericanos inició el 19 en Panamá, una última ronda de conversaciones en orden a compaginar el trabajo realizado desde 1984 y concluir los detalles de instrumentación del acta de paz. La reunión finalizó dos días después sin que los vicescancilleres llegaran a un acuerdo sobre los principales puntos pendientes del documento, al verse entorpecida la redacción final de éste por las insalvables diferencias de opinión entre El Salvador, Honduras y Costa Rica, por un lado, y Nicaragua, por el otro, en torno al capítulo sobre asuntos de seguridad y, específicamente, a la regulación de las maniobras militares conjuntas y la delimitación del tamaño y dotación de armas de los ejércitos

centroamericanos. Pese a las elecciones en Guatemala y Honduras, los vientos de la guerra desvanecieron una vez más las posibilidades de la distensión regional.

Por lo que respecta a diciembre, el mes constituyó un remate coherente de lo que fueron las líneas de fuerza del proceso político a lo largo del último trimestre del año. El 10, la sala de lo constitucional de la corte suprema de justicia falló en favor del recurso de amparo interpuesto por el ex-fiscal general de la república, Dr. José Francisco Guerrero, en contra de la destitución de que había sido objeto por parte de la asamblea de su cargo de fiscal el 21 de mayo. Según el dictamen, el Dr. Guerrero debía reasumir la fiscalía el 12 de diciembre, aunque se reconocía "la validez jurídica de los actos realizados" por Santiago Mendoza Aguilar, a quien la asamblea había nombrado en mayo sustituto de Guerrero. Al comentar el fallo, diversos diputados del PDC señalaron que la decisión de la corte era una "orden que debía cumplirse," pero al propio tiempo significaba un "golpe muy fuerte" a la asamblea, mientras que el jefe de la fracción democristiana, Atilio Vieyetz, manifestó que "yo creo que la corte suprema se ha equivocado, pero no hay más que aceptar el fallo. Habrá que ver si hay algún recurso que interponer. Lo lamentamos por el personaje tan funesto, así como por el cargo tan importante que está en juego."

Más que expresar una provocación audaz de la derecha a los rencores democristianos contra Guerrero, la restitución del ex-fiscal constituyó una medida del profundo debilitamiento político del PDC, ante su incapacidad de reactivar la economía y desempantanar la guerra. El presupuesto general de la nación para 1986, aprobado el 3 de diciembre por la mayoría democristiana en la asamblea y el voto razonado del PCN, en contra de ARENA, PAISA y Fortín Magaña, fue otro reflejo de ello. Según informaron varios funcionarios gubernamentales, entre ellos el propio Duarte, cerca del 40 por ciento de los 2.631.317.940 colones del presupuesto sería absorbido por los gastos de defensa y seguridad pública. Junto a ello, la amortización de la deuda pública representará el 27 por ciento del presupuesto y además se anticipaba un déficit fiscal de 939 millones de colones. A efectos de compensar éste parcialmente, la bancada democristiana aprobó en la misma plenaria legislativa una emisión de bonos hasta por 350 millones de colones.

En este marco de crisis económica, el presidente Duarte se reunió el 17 con representantes del sector privado, a quienes presentó un paquete de medidas fiscales y monetarias, encaminado a estabilizar la situación económica. Según explicó, las medidas ya habían sido expuestas a la Fuerza Armada y serían presentadas ese mismo día a los sindicatos. La justificación del paquete corrió a cargo del ministro de planificación, quien, entre otras disposiciones, enumeró el aumento a las tasas de interés, la limitación del crédito al sector público, la revisión de las líneas de refinanciamiento para adecuarlas a las necesidades, el cambio único del colón con respecto al dólar (5 por uno), la reducción del gasto público en un 10 por ciento, el aumento de las tarifas de agua, luz, teléfonos y puertos, la creación de un impuesto de emergencia por 3 años, aplicables al patrimonio tanto de las empresas como de las personas, incremento del impuesto del papel sellado y de las exportaciones de café, y la aplicación de la nomenclatura arancelaria de Bruselas. De implementarse las medidas, el gobierno espera incrementar sus ingresos fiscales en 290 millones de colones con los nuevos impuestos al patrimonio, 350 millones provenientes del nuevo impuesto al café, y 240 millones en concepto de impuesto por incremento del tipo de cambio. Ello totalizaría 880 millones de colones, monto ligeramente inferior al déficit presupuestario estimado, pero que en todo caso resolvería en lo sustancial el déficit.

Otras medidas propuestas consistían en el aumento de la gasolina de 6 a 14 colones el galón, y del diesel, de 4 a 8 colones. Por otra parte, los efectos inflacionarios del paquete pretendían contrarrestarse mediante un control eficiente del nivel de precios, especialmente los de la canasta básica; el subsidio al cultivo de alimentos y al transporte; la congelación de alquileres; el control de los costos del servicio de salud; y el mantenimiento de los intereses de la vivienda mínima a los niveles existentes.

Las reacciones de descontento al "programa de reactivación" se vieron favorecidas por el hermetismo con que el gobierno procedió a realizar consultas en determinadas esferas del sector privado, al tiempo que evadió una exposición abierta de las medidas ante los sectores populares, no obstante las declaraciones de Guevara Lacayo de que "la filosofía del paquete es para equilibrar la economía y favorecer a las grandes mayorías." Entre los primeros pronunciamientos en reacción

a las medidas, destacaron las voces de la pequeña empresa, la cual aparentemente no fue citada a la reunión del 17. La Federación Nacional de la Pequeña Empresa de El Salvador (FENAPES) emitió el 20 un comunicado "en vista de los anuncios hechos por el gobierno sobre la devaluación o cambio único y el paquete de nuevos impuestos que pretende establecer el régimen del Ing. José Napelón Duarte," ante lo cual "no puede menos que alzar su voz de protesta por la espiral inflacionaria y el deterioro de la economía de la familia salvadoreña y lo impolítico del anuncio en esta época de Navidad y Año Nuevo." El mismo día, el presidente de la Sociedad de Comerciantes e Industriales Salvadoreños (SCIS) informó que "en la actualidad ascienden a 627 las fábricas cerradas y existe un 50 por ciento de desempleo a nivel nacional," por lo cual "el gobierno, en vez de crear nuevos impuestos, debería motivar a la empresa privada con financiamientos para crear nuevas fuentes de trabajo." A ello agregó "hay que crear un gobierno de unidad nacional porque el de turno se encuentra sin capitán y no sabemos a dónde vamos." Similares exigencias de incentivos y "seguridad jurídica" para el sector productivo expuso el presidente de ARENA, Alfredo Cristiani, quien demandó que "el gobierno debe definirse con un modelo económico" ya que "de lo contrario están jugando con el pueblo, presentando 'parches' para cubrir el déficit fiscal, los despilfarros de la mala administración y los gastos que provoca la guerra." En relación a esto último, Cristiani reprochó a Duarte la indecisión democrática para aplastar militarmente al FMLN, "si se está haciendo creer a todo el pueblo que debe costear la guerra, hay que definir qué camino se va a tomar en lo militar. Si esta guerra se pretende ganar militarmente, para estar consciente de las consecuencias políticas, sociales y económicas, o si se pretende realmente una solución política. Pero no se puede estar jugando, vendiendo una idea y actuando de otra manera." En la misma línea de Cristiani, otros representantes del sector privado adujeron que "si la elevación de los impuestos es para obtener recursos para financiar la guerra, es incongruente que a la Fuerza Armada se le restrinja en sus movimientos y operaciones por motivos de tipo político."

Para desconuelo de la empresa privada, la guerra se recrudeció sin abrir perspectivas de avance a la Fuerza Armada, pese a los masivos operativos con que inició el mes en los alrededores de Juayá (Sonsonate) y las faldas del Chinchontepec (San Vicente), para proteger la

recolección de café; y en las inmediaciones de Jucuarán para impedir el abastecimiento de armas al FMLN. A lo largo de las dos primeras semanas de diciembre, se entablaron fuertes combates en los alrededores de Santiago de María y El Triunfo (Usulután), Corinto (Morazán) y Chirilagua (San Miguel), y luego, hacia mediados del mes, en el área de Suchitoto y San José de Guayabal (Cuscatlán), Mercedes Umaña, Nueva Granada, Jucuapa y Villa El Triunfo (Usulután) y Sesori y San Luis de La Reina (San Miguel).

Por su parte, el FMLN realizó diversas acciones ofensivas de relativa importancia. Radio Venceremos informó que en el curso de la operación "Viva la lucha combativa de los trabajadores y la unidad del FMLN," batallones guerrilleros atacaron el 12 la base militar de "Peña Colorada," en las inmediaciones del cerro de Guazapa, y causaron 70 bajas a la Fuerza Armada, entre muertos y heridos. Venceremos informó de otros ataques a la posición del ejército en San Miguel de Mercedes, así como al destacamento militar número uno, en Chalatenango, donde el FMLN habría causado 30 bajas al ejército y decomisado 16 fusiles M-16. En la madrugada del mismo día, atacó la guarnición del batallón de apoyo de la quinta brigada, el cual custodiaba el beneficio de café Acahuapa (San Vicente), cuyas instalaciones destruyó, además de causar 18 bajas a los efectivos de la guarnición. A su vez, la Fuerza Armada respondió con nuevos operativos antiguerrilleros en la zona del Chinchontepec y del cerro La Campana, los cuales llevaron a la suspensión temporal de las cortas de café en las fincas de la zona en un radio de unos 10 kilómetros.

Según un balance ofrecido el 19 por el comandante Jorge Meléndez, entre el primero de julio y el 15 de diciembre de 1985, el FMLN efectuó 132 emboscadas (80 entre julio y septiembre, y 52 entre octubre y noviembre) y causó 3.200 bajas a la Fuerza Armada. Del total de bajas, 669 fueron producto de minas, y 578 de emboscadas. Cinco días después, Radio Venceremos informó que entre el primero y el 23 de diciembre, el FMLN había causado 431 bajas a la Fuerza Armada, y le había incautado 43 fusiles, una ametralladora .50, un mortero 81 mm, un mortero 60 mm, un cañón 90 mm, un lanzagranadas M-79 y dos ametralladoras M-60.

No obstante el nivel relativamente elevado de actividad militar, el FDR-FMLN anunció el 13 de diciembre que, "con el propósito de permi-

tir al pueblo salvadoreño el goce tranquilo de sus festividades de navidad y año nuevo," decretaba una tregua a cumplirse en dos fases: la primera entre las 01:00 horas del 24 hasta las 24:00 horas del 26; la segunda, desde las 01:00 horas del 31 de diciembre hasta las 24:00 horas del 2 de enero. Según advertía el comunicado, durante el período de la tregua "nuestras fuerzas cesarán todo tipo de acción militar ofensiva" y se limitarán "a la defensa en caso de un ataque del ejército gubernamental sobre nuestros efectivos, población civil o territorio bajo control revolucionario." El FMLN se comprometía a garantizar "la libertad de movimiento de los soldados y clases de la Fuerza Armada que visitan a sus familiares tanto en las zonas de control revolucionario como en las zonas en disputa y demás zonas del territorio nacional, ya que ellos han sido extraídos de hogares del pueblo humilde, y anhelan volver a reunirse con su familia." Al ofrecimiento, el presidente Duarte respondió inicialmente que "es impropio hablar de 'tregua,' porque aquí no hay dos bandos en conflicto, sino grupos terroristas y un ejército legalmente constituido que vela por la tranquilidad del pueblo," mientras que el jefe del estado mayor, general Blandón, puntualizó que "ninguna tregua tiene validez al no emanar de las autoridades constituidas." Posteriormente, luego de que el FMLN accediera de inmediato a la solicitud de la Iglesia católica de extender el período de tregua entre el 24 de diciembre y el 2 de enero, el ministerio de cultura se vio obligado a emitir un comunicado en el cual manifestaba que el gobierno había decidido "en base al espíritu de la navidad y a la petición de la Iglesia salvadoreña, suspender las acciones ofensivas de las Fuerzas Armadas durante el período navideño," aunque al propio tiempo enfatizaba que "la Fuerza Armada salvadoreña tiene la obligación constitucional de velar por la seguridad y tranquilidad del pueblo salvadoreño, así como la de defender las libertades democráticas, por lo que permanecerá vigilante durante todo el período navideño."

A diferencia de las navidades de 1984 esta vez la tregua fue severamente violentada. Durante toda la tarde del 24 y la madrugada del 25, tropas del destacamento militar número cuatro, de San Francisco Gotera, mantuvieron intensos combates con comandos del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en el cantón Calpules, jurisdicción de Corinto (Morazán), mientras que, en La Unión, efectivos del destacamento militar número tres sostuvieron recios enfrenta-

mientos con unidades guerrilleras del frente suroriental "Francisco Sánchez" en las faldas del volcán Conchagua. A la misma hora, se registraron otros combates sobre la ruta militar, a la altura del puente "La Cruzadilla," jurisdicción de San Carlos Pasaquina (La Unión).

El 26, el presidente del FDR, Guillermo Ungo, acusó al ejército de haber lanzado ataques, los días 24 y 25, en los departamentos de Morazán, Usulután, San Vicente, Chalatenango y en el cerro de Guazapa, en San Salvador; y denunció bombardeos de artillería y mortereo, así como ametrallamientos desde aviones A-37 y C-37. Al día siguiente, el FMLN declaró a través de Radio Venceremos que debido a las "violaciones generalizadas" de la tregua por parte del gobierno, no se consideraba ya obligado a mantenerse en una posición pasiva, aun cuando se abstendría del sabotaje al sistema eléctrico y de transporte, y del boicot de carreteras, para que "el pueblo festeje las fiestas hasta el 2 de enero."

El mismo 27, acompañado del ministro de defensa, el presidente Duarte visitó diversos batallones de reacción inmediata, para confirmar su acuartelamiento. El mandantario indicó que efectuaba tal visita "a petición de Monseñor Rivera," a quien "hemos dicho que con mucho gusto vamos a suspender las acciones ofensivas." Por otra parte, al informar que la extrema derecha estaba enviando cartas en las cuales invitaba a los jefes de los destacamentos militares al golpe de Estado, Duarte explicó que "es lógico que aquellos sectores acostumbrados a los privilegios históricos quieran mantenerse y tratar de recuperar el poder que antes estuvo en sus manos y que hoy está en manos del pueblo."

Por su lado, en conformación indirecta de que el rompimiento de la tregua había provenido de la Fuerza Armada, diversos comandantes militares declararon no haber recibido orden alguna para suspender las operaciones ofensivas. El comandante militar de San Francisco Gotera, coronel Mauricio Ernesto Vargas, expresó que "definitivamente no tengo conocimiento de ningún tipo de tregua. No hemos recibido orden alguna de suspender la ofensiva. No hay tregua, no ha sido firmada. No pactamos con los bandidos. Nosotros estamos en la obligación de velar por el cumplimiento de los derechos humanos contra esos asesinos, violadores, criminales y terroristas." Por su parte, el comandante de la cuarta brigada de infantería de El Paraíso (Chalatenango), coronel Sigifredo Ochoa, expresó que "no

hemos violado ninguna tregua y a las bandas de terroristas los vamos a atacar estén donde estén por que no hemos firmado nada y punto." Al informársele que hacía más de 48 horas que el ministerio de cultura había emitido el comunicado en el cual el gobierno aceptaba la solicitud de tregua hecha por la Iglesia, Ochoa atribuyó su desconocimiento del comunicado a la "falta de comunicación", al tiempo que explicó que sólo aceptaba órdenes del ejecutivo cuando éste las transmitía a través del alto mando, "solamente así aceptamos las órdenes que se nos dan. Con respecto a ese comunicado del gobierno, no tenemos conocimiento, y las operaciones las continuaremos." Por otra parte, recalcó que la Fuerza Armada "nos debemos al pueblo y no a un partido determinado;" "debemos olvidarnos de quién está en el gobierno y lo que tenemos que hacer en este momento es unirnos contra del marxismo." Ochoa aprovechó también la entrevista para expresar que el gobierno debe darle "facilidades a la empresa privada, ya que no se le ha tomado verdaderamente en cuenta y dentro de esta democracia, que está dentro de la esfera occidental democrática, la empresa privada debe tener una participación activa."

Por si las declaraciones de Vargas y Ochoa no pusieran elocuentemente en entredicho la capacidad del ejecutivo para imponer el cumplimiento de la tregua a la Fuerza Armada, unidades de la tercera brigada de infantería, los destacamentos militares tres y cuatro, el batallón Arce, la fuerza aérea y la brigada de artillería, iniciaron el 27 en la zona norte de Morazán, La Unión y San Miguel, una amplia operación envolvente encaminada a "desarticular posiciones del FMLN", mientras que en San Vicente se intensificaban los operativos, particularmente en el área de Cerros de San Pedro, Santa Clara y San Esteban Catarina, a lo largo del río Titihuapa; y en la zona oriente y sur siguiendo el curso del río Acahuapa hasta el Lempa.

Al difundir un balance militar del año, Radio Venceremos informó que el FMLN causó 6.048 muertos a la Fuerza Armada y le decomisó 316 fusiles y 38 armas de apoyo, entre morteros y ametralladoras. Durante el segundo semestre, el 42 por ciento de las bajas castrenses fue producto de minas. La emisora añadió que "estamos preparados para una larga batalla, mucho más larga de lo que el gobierno puede resistir." En contraste, datos preliminares ofrecidos por el general Blandón revelaban que el FMLN había sufrido a

lo largo del año 1.034 muertos, 712 heridos y 2.031 desertores, mientras que las bajas de la Fuerza Armada habrían sido 426 muertos y 1.683 heridos.

En este contexto de renovados despliegues de fuerza y de endurecimiento ideológico, el mes cerró las puertas que los sectores favorables al diálogo intentaron abrir. La muestra más significativa de ello lo fueron las explícitas amenazas gubernamentales de capturar, en cuanto ingresaran al país, a Rubén Zamora, Héctor Oqueli, Oscar Acevedo y Dagoberto Gutiérrez, a quienes el FDR-FMLN había delegado para asistir a la clausura de la II Jornada "Universidad por la paz," organizada entre el 9 y 14 de diciembre por la Universidad de El Salvador. No obstante las gestiones realizadas por el comité organizador de la jornada ante la Iglesia y las embajadas de Francia, España, México, Colombia y Panamá para facilitar el ingreso de la delegación, el presidente Duarte calificó de "delincuentes" a los dirigentes de los frentes, ya que "ellos son responsables del secuestro de mi hija, de la masacre de la Zona Rosa y de otros crímenes y secuestros," y amenazó con que "si entran van a ser capturados por los cuerpos de seguridad y llevados a los tribunales." Al mismo tiempo, señaló que la jornada "ha sido creada con el ánimo de provocar problemas internos en el país y no con el ánimo de buscar la paz, sino de buscar las confrontaciones. Distinto es cuando se coordina un plan y el gobierno garantiza la seguridad de los participantes en un encuentro, como ocurrió con La Palma y Ayuagualo. Hoy sencillamente se quiere provocar, se quiere desestabilizar el país, cuando el FDR-FMLN comunica que quiere venir. Con esa tesis de venir al país, cualquier convicto de la justicia va a anunciar mañana que quiere hacerlo; cualquier criminal, cualquier gangster podría estar exigiendo garantías para entrar." En la misma tónica, COPREFA emitió el 13 un comunicado en el cual señalaba que "la presencia de los dirigentes terroristas del FMLN-FDR no es más que la manifestación de propósitos sostenidos de continuar la agresión terrorista" y advertía que la Fuerza Armada procedería a capturarlos "en cumplimiento al mandato constitucional de mantener el orden público y hacer cumplir las leyes para proteger la vida y los bienes públicos y privados."

Los niveles de tensión política prevalecientes durante el mes, sin embargo, no impidieron al presidente Duarte efectuar entre el 18 y el 22 de

diciembre un nuevo viaje a Estados Unidos, invitado por el Council on Foreign Relations. Al solicitar a la asamblea permiso para efectuar el viaje, el mandatario adujo que su cometido "dentro de la crisis y guerra que vivimos es estar presente en los foros y países internacionales donde se origina la noticia. Nadie ignora la importancia de ganar la guerra en cada uno de los frentes" militar, político, social, económico e internacional: "a mí me toca llevar la realidad democrática de nuestro pueblo y es por esta razón que voy a los Estados Unidos e iré cuanta vez sea necesario."

De haber atendido el mandatario con la misma solicitud el problema limítrofe con Honduras, posiblemente El Salvador no habría sido sorprendido en una posición diplomática tan precaria al vencerse el 10 de diciembre el plazo fijado por el tratado general de paz para dirimir directamente el litigio. Encabezadas por los vicescancilleres Ricardo Acevedo Peralta y Tomás Arita Valle, las comisiones negociadoras de ambos países iniciaron el 9, en Tegucigalpa, la última ronda de negociaciones bilaterales para resolver el diferendo por la vía directa y realizar en dos días la demarcación del 66.3 por ciento de la frontera terrestre, que no lograron efectuar en 5 años de negociaciones las comisiones mixtas de límites de ambas naciones. Como era anticipable, las conversaciones concluyeron el 10, sin alcanzar un acuerdo en el diferendo. Se firmó un acta especial en la cual se estableció el fin de la etapa de "arreglo directo" para solucionar el litigio. Al preguntársele por qué habían fracasado las negociaciones directas, el vicescanciller hondureño replicó; "para bailar un tango se necesitan dos." Al día siguiente, el gobierno de Honduras transformó su comisión de límites en una comi-

sión de altos estudios territoriales y reiteró una vez más su disposición de acudir inmediatamente a La Haya. Por su parte, el gobierno salvadoreño aseguró contar con documentos y pruebas de "gran fuerza legal" que le serían "favorables en la disputa" y dio a conocer la creación de 6 comisiones encargadas de preparar la exposición salvadoreña ante La Haya: comisión de estudios territoriales, de demarcación de límites, de consulta con juristas, de consulta con la cancillería, de asesoría internacional y de preparativos físicos y administrativos. Asimismo, el ministerio de relaciones exteriores anunció la aprobación de un presupuesto de 3 millones de dólares para librar "la batalla final," así como la designación de un embajador específico ante La Haya y la inminente contratación de otros dos juristas extranjeros —uno francés y otro inglés—, además del uruguayo Jiménez de Arechaga.

En el plano regional, los infructuosos esfuerzos de la ONU y la OEA para sacar a Contadora del severo *impasse* sufrido tras la controversial reunión celebrada en Panamá a finales de noviembre, reflejaron indirectamente el exitoso empeño del gobierno de Reagan para desbaratar el proceso de distensión regional. Los frutos del colapso de la gestión pacificadora no se hicieron esperar: envalentonados por el aparente fracaso de ésta y la reanudación de la ayuda militar norteamericana, los contrarrevolucionarios antisandinistas dieron un nuevo paso en la escalada armamentista en la zona al derribar un helicóptero militar nicaragüense con cohetes tierra-aire tipo SAM-7. Extraño hubiese sido que Estados Unidos no aprovechara los estertores de Contadora para insuflar nuevo aliento a la agresión terrorista contra Nicaragua.